

La impunidad como problema principal

Por **Lucía Dammert**



La sensación de impunidad es posiblemente una de las emociones que más afectan la legitimidad política e institucional y la sensación individual de abandono e inseguridad. Impunidad entendida como la falta de respuesta a situaciones violentas, criminales, ilegales, que día a día llenan las redes sociales y los medios de comunicación. Frente a la incapacidad individual de resolver los problemas “por mano propia”, esperamos que se haga justicia, que no se repitan los hechos, que los que consideramos culpables paguen de alguna forma. Y para eso debería estar el Estado.

Pero la inundación de casos no permite identificar los procesos y mucho menos sus derroteros. ¿Qué pasó con los miles que viajaron usando licencias médicas posiblemente fraudulentas? ¿Qué castigo recibieron los que tramaron mecanismos de defraudación del Estado? ¿Qué pasó con asesinos, sicarios, criminales que aparecen vinculados a hechos delictuales? Cada día un nuevo escándalo que nubla la reacción institucional, que genera rápidas conferencias de prensa, respuestas de malestar e incluso reclamos por mayores castigos de aquellos supuestamente encargados de resolver los problemas. Pero también amplias coberturas de prensa y matinales que revisan en detalle los problemas, que establecen hipótesis de explicación e incluso también posibles culpables. Finalmente, miles de mensajes en redes sociales que muestran indignación, preocupación, rabia, creatividad y también revanchismo político-electoral. Todo dura no más de 48 horas y de ahí se desvanece. En general, pasando al siguiente escándalo.

Se desvanece el interés, pero queda la sensación de abandono. Porque pareciera que nada se resuelve, que cometer delitos no tiene costos, que el Estado no castiga, que la justicia no funciona, que los que ganan son los que juegan al margen de la ley. En muchos casos por ineficiencia de las instituciones o por corrupción, pero también por una lógica reactiva que aumenta el volumen del ruido mediático en la denuncia, pero luego produce un silencio completo en el proceso y especialmente en los resultados.

La ciudadanía observa el espectáculo primero con preocupación y luego con molestia. Los encargados de resolver los problemas, de asegurar que se cumplan las leyes y, sobre todo, de limitar los abusos (vengan de donde vengan) no pueden seguir siendo parte del coro de preocupados o sorprendidos. Se requieren mecanismos de comunicación política clara que muestren avances rápidos de la justicia, mecanismos certeros de castigo, transformaciones para evitar repetición de prácticas, y señales contundentes de que no todo vale.

No vivimos en un país “dominado” por el narco, ni enfrentamos una institucionalidad “corrompida en su totalidad”, ni todos los funcionarios públicos “se aprovechan del Estado”, pero sin duda la cultura de la ilegalidad ha llegado para quedarse y los mercados ilegales inundan la economía con dinero negro. Ambos problemas requieren ser enfrentados con medidas sólidas y de largo aliento. La ley del más fuerte, el más poderoso o el más violento solo consolida sociedades segregadas, fragmentadas, discriminatorias y autoritarias. Las campañas políticas, pero sobre todo los que gobiernen, tienen la tarea de enfrentar con seriedad y sobriedad los problemas y mostrar las capacidades institucionales, no para el titular del diario, sino para asegurar que el deterioro no continúe y la impunidad se convierta en una característica más de la vida en sociedad.